



## Avances y desafíos en la asistencia a personas damnificadas en el sector de las confecciones.

Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires.



Avances y desafíos en la asistencia a personas damnificadas en el sector de las confecciones. Autora: Arcos, Ayelén. Equipo técnico: Desarrollo y Autogestión (DyA).

1. Rescate. 2. Acompañamiento. 3. Personas damnificadas. 4. Delito. 5. Trata de Personas. 6. Provincia de Buenos Aires.

## EQUIPO DE TRABAJO

Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la Provincia de Buenos Aires: María Agustina lafolla Cardos

Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Provincia de Buenos Aires: Elina Contreras

Coordinadora del proyecto ATLAS: Verónica Jaramillo

Elaboración del documento: Ayelén Arcos

Consultora experta: Silvina Gorsky

Revisión de texto: María Florencia Blanco Esmoris

Corrección: Nancy Boufflet

Diagramación y maquetación: Josefina de la Vega y Agustina Rebagliati (Estudio Bloom).

El financiamiento para esta publicación ha sido proporcionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en virtud del acuerdo de cooperación número IL-32821-18-75K.

Este material no refleja necesariamente los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ni tampoco las menciones de marcas, productos comerciales u organizaciones, implican la aprobación del Gobierno de Estados Unidos.

# Índice

Introducción: Iniciativa ATLAS y el Programa .....	4
Aclaraciones metodológicas .....	7
Fuentes y análisis .....	7
Pensándo-nos: taller de validación final .....	9
El Programa como equipo de trabajo .....	9
Particularidades de la asistencia en el sector de las confecciones .....	12
Restitución de derechos de las personas damnificadas por el delito de trata de personas .....	13
Recibir información .....	14
Tipos de asistencia .....	14
Alojamiento, higiene y alimentación .....	14
Empleo .....	15
Protección .....	16
Permanencia en el país o retorno .....	16
Acompañamiento en el proceso judicial .....	17
Educación .....	17
Abordaje con niños y adolescentes .....	17
Producción de información sobre trata de personas .....	18
Avances y desafíos identificados .....	19
Anexo normativo .....	20
Trata de personas, explotación e industria de la confección .....	20
Normativa internacional .....	20
Otros instrumentos de relevancia en torno a la trata y sus delitos conexos .....	20
Normativa Nacional .....	21
Normativa provincial .....	23
Protocolos de asistencia y directrices .....	24



## Introducción: Iniciativa ATLAS y el Programa<sup>1</sup>

El presente informe se concentra en el funcionamiento de la asistencia brindada a las personas damnificadas por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en el sector de las confecciones en la provincia de Buenos Aires (Argentina). El informe es desarrollado por la organización no gubernamental Centro Desarrollo y Autogestión (DyA), responsable de la ejecución en Argentina de la iniciativa global para “Lograr un cambio duradero para una mejor aplicación de las leyes laborales y penales para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas” (en su sigla en inglés ATLAS)<sup>2</sup>. Esta última tiene por objetivo aportar a la aplicación del marco normativo y a la coordinación de actores involucrados en el abordaje de la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil en diversas industrias. El Proyecto es liderado por Winrock Internacional y se ejecuta en diversos países con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL).

Este documento sintetiza los hallazgos obtenidos del análisis de los procedimientos de intervención para el rescate, asistencia y contención a las personas damnificadas por el delito de trata de personas que desarrolla el Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en adelante el Programa. El Programa fue creado en el año 2013 a través de la sanción de la Ley provincial 14.453.<sup>3</sup> Su funcionamiento depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Justicia y —desde el año 2020— bajo la órbita de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima.

El Programa actúa como Punto Focal Provincial,<sup>4</sup> atendiendo las demandas de las víctimas bajo su jurisdicción, principalmente a través de una derivación del Poder Judicial o del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (en adelante, Programa Nacional de Rescate), y articulando con otras instituciones y organismos para proveer asistencia. Según la Ley 14.453, el Programa tiene injerencia en el diseño de políticas destinadas a asegurar la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas. Además, tiene la función de promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo interinstitucional; desarrollar actividades de capacitación y difusión; contribuir a la implementación de refugios y prevenir la revictimización.

De acuerdo con el Protocolo provincial de actuación del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata (Res. 19/13), el Programa cuenta con una dirección y con equipos interdisciplinarios con distintas funciones, a saber:

<sup>1</sup> Un agradecimiento especial a Silvina Gorsky por la cuidadosa lectura del documento y las sugerencias que permitieron mejorarlo.

<sup>2</sup> Attaining Lasting Change for Better Enforcement of Labor and Criminal Law to Address Child Labor, Forced Labor and Human Trafficking.

<sup>3</sup> La Ley 14.453 Sobre prevención, lucha y erradicación del delito de Trata de Personas y de los delitos conexos (2012) creó, además, la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia a las Víctimas como autoridad de aplicación del Programa. Esta oficina fue relanzada en el año 2020.

<sup>4</sup> Existen dos tipos de Puntos Focales. El Punto Focal Nacional de Asistencia depende del Ministerio de Desarrollo Social y es el responsable de brindar asistencia integral a personas víctimas de trata, en especial a aquellas de origen extranjero que deseen retornar a su país de origen. La SENAF actúa como Punto Focal Nacional rigiéndose por el Protocolo Nacional de Asistencia. En cambio, los Puntos Focales Provinciales brindan asistencia integral a las personas víctimas de trata en sus jurisdicciones respectivas, articulando los retornos de estas personas a sus lugares de origen dentro del territorio nacional cuando aquellas lo deseen (excepto en los casos que se especifican en el informe). En la provincia de Buenos Aires, el Punto Focal Provincial se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se rigen por el Protocolo Nacional de Asistencia y el Protocolo Provincial (Véase en Anexo: Resolución 1280/2015 de la Jefatura de Gabinete de Ministros).

## Esquema 1. Funciones de la Dirección del Programa y de los Equipos Interdisciplinarios

Funciones de la Dirección del Programa de Rescate y Acompañamiento	Funciones de los Equipos Interdisciplinarios
Coordinar los dispositivos del Programa de Rescate y Acompañamiento.	Estar a disposición de el/la responsable operativo/a de cada rescate o allanamiento.
Generar mecanismos de recepción directa de denuncias, oficios, notificaciones e información judicial y administrativa inherentes al rescate.	Aplicar medidas de atención primaria para las víctimas en el momento del allanamiento o desde el primer contacto con ella/s.
Servir de enlace con los organismos nacionales, provinciales y/o judiciales.	Realizar la entrevista inicial, formal o informal, para identificar la problemática y las conductas posiblemente constitutivas de la trata de personas y los delitos conexos.
Conformar los equipos interdisciplinarios ante los requerimientos de intervenciones judiciales y/o administrativas que tengan.	Identificar y evaluar las necesidades inmediatas y actuales de las víctimas, brindando en el momento oportuno y de manera sensible opciones que garanticen su seguridad y confianza.
Coordinar con los organismos y dependencias gubernamentales nacionales, provinciales y municipales y con las organizaciones no gubernamentales el diseño y ejecución de planes, programas y acciones que aseguren el correcto cumplimiento de la normativa legal en la problemática y prevención de situaciones vinculadas con la trata de personas y delitos conexos.	Garantizar que los servicios, acciones y/o procedimientos que se realicen sean informados a las víctimas, así como también sus derechos.
Articular con los organismos competentes las acciones necesarias en el proceso de asistencia.	Brindar protección de la privacidad.
Designar a el/la responsable operativo/a de cada allanamiento y/o rescate encargado/a de coordinar el dispositivo de asistencia a las posibles víctimas (deberá estar acompañado/a por el equipo interdisciplinario).	Brindar contención y asistencia psicológica (evaluación psicológica) y coordinar con el/la responsable operativo/a la derivación urgente, en caso de ser necesaria, con los efectores de salud.
Requerir en caso necesario la colaboración para la conformación del dispositivo de asistencia.	Otorgar información y orientación legal y brindar acompañamiento en el momento de la declaración de la/s víctima/s.

Fuente: Elaboración Propia en el marco de la consultoría.

La intervención del Programa puede iniciar en el allanamiento, o posteriormente a este. En el primer caso, las personas damnificadas identificadas deben ser contenidas por el personal especializado del Programa, cuya función en una primera etapa consiste en suministrar información tanto sobre el proceso como respecto a su rol, procurando sembrar confianza y solicitando el consentimiento para proveer la asistencia de emergencia. En esta instancia es necesario que los profesionales del Programa sostengan una breve entrevista con la persona damnificada para delinear la identidad de la persona, conocer la situación experimentada y sus referencias vinculares. Como se advierte, la asistencia es provista “a demanda” y, dado que el carácter intempestivo de los allanamientos puede resultar abrumador e incluso hostil para la persona damnificada, se recomienda que sean recabados los datos de contacto para luego reiterar el ofrecimiento de asistencia entre aquellos que se negaron en un primer momento.

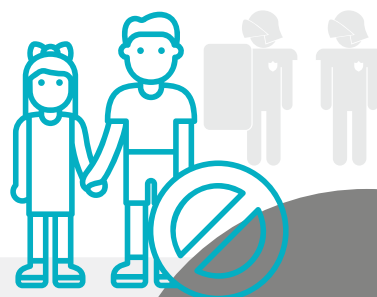
**En caso de no haber intervenido durante el allanamiento y haber sido convocado por medio de una derivación del Programa Nacional de Rescate quien evalúa si la persona se encuentra en condiciones de prestar testimonio judicial en la causa, el cual será desarrollado en Cámara Gesell y deberá contar con el acompañamiento del Programa de Rescate provincial o nacional.**

El Punto Focal Provincial correspondiente al lugar de la explotación debe brindar la asistencia inmediata siguiendo lo establecido por los Protocolos provincial y nacional. Se prevé que las personas damnificadas puedan acceder a ropa, abrigo, kits de higiene en los centros de asistencia. El Punto Focal Nacional o Provincial debe garantizar el resguardo, alojamiento, provisión de necesidades, asistencia médica y psicológica de la persona.

En caso de que la persona damnificada desee retornar a su lugar de origen o irse de la jurisdicción donde fue encontrada, el Punto Focal Provincial gestiona el traslado articulando con los organismos de la jurisdicción de destino. Si el lugar de origen o el lugar solicitado se encuentra fuera de las fronteras nacionales, el Punto Focal Provincial gestionará con el Punto Focal Nacional el traslado hacia la Ciudad de Buenos Aires, sede de este último. Será la SENAF –en calidad de Punto Focal Nacional– quien se responsabilizará del posterior traslado internacional (excepto cuando dicho lugar sea limítrofe y cercano al Punto Focal Provincial correspondiente a la jurisdicción donde fue encontrada la persona damnificada). En ambas situaciones debe confeccionarse un informe detallado donde consten las articulaciones e intervenciones con miras a que el Punto Focal Provincial de la localidad de destino pueda dar continuidad a la asistencia. Para ello debe asegurarse que el retorno no exponga a la persona ante los captores, su entorno, o a cualquier otra situación de riesgo. En este punto es necesario que la información recabada apunte a conocer la situación socioeconómica, familiar y vincular de la persona para evaluar la viabilidad del traslado. La articulación y comunicación entre las instituciones intervinientes y los Puntos Focales Provinciales y Nacional deberá ser fluida y permanente a los fines de garantizar la continuidad de la asistencia a la persona.

Si la persona damnificada desea permanecer dentro del país, el Punto Focal Provincial articulará con las instituciones competentes para tramitar la documentación necesaria en cada caso y proveerá la asistencia jurídica, habitacional y en materia de salud mental y física. A ello le sigue una segunda etapa de asistencia integral orientada a impulsar un proyecto de vida autónomo que permita a la persona damnificada superar su condición de vulnerabilidad (SENAF, 2022).

Ante la presencia de niños o niñas en los allanamientos, los protocolos indican que debe convocarse al organismo local competente en la protección de los derechos de las niñeces y adolescencias. Si se trata de menores de edad extranjeros interviene el Punto Focal Nacional acompañando la declaración testimonial, trazando los contactos con su familia y articulando con las instituciones del país de origen. Según la “Guía de orientaciones institucionales para la asistencia a las víctimas de trata de personas y explotación laboral y sexual” (SENAF, 2022), la articulación entre los organismos e instituciones debe estar orientada por el “Principio de Corresponsabilidad” que propone la construcción de relaciones de responsabilidad e independencia en lugar de una derivación lineal de los casos. La guía establece, por último, que el Punto Focal Nacional solicitará a los Puntos Focales Provinciales la confección periódica de estadísticas y el monitoreo de los casos.



## Aclaraciones metodológicas

### Fuentes y análisis

#### Análisis del corpus normativo

En primera instancia fue recopilada normativa provincial y nacional de relevancia en la temática. La misma fue sintetizada en el anexo normativo que constituyó el insumo para diseñar el cuestionario abierto que orientó las entrevistas. El anexo se centra en leyes provinciales, protocolos, directrices y resoluciones ligados específicamente a la asistencia a víctimas y personas damnificadas por el delito de trata de personas. La presentación de la normativa apunta a enmarcar el análisis del funcionamiento del Programa y sus alcances.

#### Entrevistas

Para la confección del siguiente informe fueron entrevistadas nueve personas que se desempeñan en los distintos sectores que integran el Programa. Se realizaron ocho entrevistas de forma virtual entre los meses de mayo y junio de 2022. La selección de las entrevistas procuró abarcar las distintas perspectivas de los miembros del equipo, en virtud de la formación profesional de cada uno y su rol en el Programa. Las entrevistas fueron de carácter semiestructurado con preguntas centradas en el funcionamiento del Programa, en las perspectivas de sus miembros en cuanto a los avances y desafíos en el último periodo y en las particularidades que presenta la asistencia en los talleres de confección.

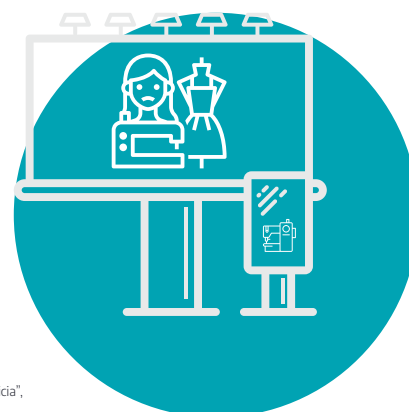
A lo largo del siguiente documento se denominará a las personas a quienes se dirige el programa como “personas damnificadas”, respetando las categorías escogidas por las y los entrevistados. Cuando se hable de “víctimas” se hará en referencia a las categorías especificadas por la normativa (leyes, protocolos, directrices, resoluciones). Por otro lado, cabe aclarar que, si bien dos de las personas entrevistadas integran el Observatorio de Acceso a la Justicia, esto es, no pertenecen exclusivamente a la órbita del Programa, a fines prácticos nos referiremos a todas las personas entrevistadas como “miembros” o “profesionales del Programa”<sup>5</sup>.

#### Análisis de casos de asistencia

El análisis de las entrevistas fue complementado con información obtenida de la síntesis de casos seleccionados elaborada por los miembros del Programa. Dicha síntesis comprende una breve descripción de las intervenciones del Programa en casos anonimizados en el sector de las confecciones en los años 2017, 2020 y 2021.

Los casos seleccionados se corresponden con talleres de costura predominantemente familiares (de entre 2 y 11 personas). En ellos se destaca la presencia de trabajadores migrantes que residían en el país desde hacía más de 5 años (entre 5 y 11 años), algunos con hijos de nacionalidad argentina y algunos con documentación nacional. Los lugares de procedencia fueron, en la mayoría de los casos, Bolivia y Paraguay. Las personas encontradas declararon haber migrado en busca de mejores condiciones de vida, siendo asistidos o contando con la intervención de algún conocido para garantizar el proceso migratorio (apelando a contactos familiares, vecinos o paisanos, también parientes cercanos que abonaron los pasajes). También fueron registrados trabajadores locales.

Los medios de contratación para los empleos en costura incluyeron avisos en la vía pública, en redes sociales o recomendaciones por parte de parientes o amigos. La mayoría de los costureros y costureras migrantes tenía menos de un año de antigüedad en el establecimiento allanado (1 a 6 meses), algunos habían trabajado para el mismo tallerista en experiencias migratorias anteriores; y, en un caso, un costurero relató que trabajaba desde hacía dos años con el mismo empleador.



<sup>5</sup> Mediante la Resolución 1673/2021 (RESO-2021-1673-GDEBA-MJYDHGP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires creó el "Observatorio de Acceso a la Justicia", la cual tendrá como objetivo principal recopilar, sistematizar y analizar los datos e información respecto al acceso a derechos.

Una parte significativa de los trabajadores de talleres entrevistados por el Programa no contaba con escolaridad completa y había ingresado al mercado de trabajo a temprana edad. Las trayectorias de aquellos costureros dan cuenta de experiencias previas de trabajo en empleos no registrados e incluso con situaciones de maltrato o restricción a la libertad ambulatoria. Algunos afirmaron que el empleo en el que se encontraban al momento del allanamiento les brindaba mejores condiciones que los empleos anteriores (porque les ofrecía una mejor remuneración, les brindaba la posibilidad de acompañar a sus hijos al hospital o simplemente recibían buen trato). Otros sostuvieron que dichos empleos constituían la única vía de inserción en el mercado laboral (por razones de edad avanzada, por las restricciones impuestas a raíz de la pandemia o porque les permitían afrontar los costos de su educación terciaria).

Las condiciones de los talleres de costura fueron descritas como precarias en la mayor parte de los casos donde intervino el Programa. Si bien se registró la presencia de menores de edad dentro de los talleres, su participación en las actividades laborales no fue acreditada. Se mencionaron algunas situaciones de violencia entre los propietarios de un taller y, en otro caso, con otros residentes del emplazamiento donde vivían y trabajaban los costureros y costureras.

La mayoría de los talleres de costura descritos trabajaban a fasón,<sup>6</sup> desarrollando operaciones específicas en cada caso (pinchado de telas, ojal y botón, corte, costura) para la fabricación de diferentes artículos (indumentaria, ropa de cama, insumos médicos) con destinos comerciales diversos (fábricas del barrio de Flores, Mercado Central, La Salada y otras empresas). La organización del trabajo dentro de estas unidades era variable. Buena parte de los y las trabajadores/as costureros/as residía dentro de los talleres, aunque también se encontraron personas que vivían fuera de estos recintos. La duración de las jornadas oscilaba mayormente entre 10 y 12 horas, encontrándose situaciones en las cuales los empleados de talleres manifestaron trabajar 8 horas y, en otras, 15 horas diarias. Asimismo, se registraron formas de remuneración a destajo, por hora y por jornada, incluso dentro del mismo establecimiento; la mayor parte de las personas encontradas desconocía el monto final de los salarios. Las tareas dentro de los talleres eran distribuidas entre las diversas personas, a menudo siguiendo diferencias de género. Así, las actividades ligadas al cuidado y reproducción social eran asignadas a las mujeres.



El informe elaborado por los equipos técnicos registró la existencia de vulnerabilidades previas entre los y las trabajadores/as de los talleres. En algunos casos, se dejó constancia de la preocupación por el hecho de que la culpabilización eventualmente recayera de forma exclusiva sobre los responsables de los inmuebles allanados, que trabajaban y vivían en iguales condiciones que sus empleados. Junto con ello fue sugerido que se prosiga la investigación a los restantes eslabones de la cadena productiva (fasoneros, comerciantes, etc.).

En la mayor parte de los casos presentados en el informe elaborado por el equipo de rescate se observa que los y las trabajadores/as de talleres de costura no solicitaron la asistencia del Programa. La intervención de los profesionales del Programa, en algunos casos, evidenció que los damnificados y las damnificadas no comprendían el motivo del allanamiento. Algunas de las personas aceptaron ser ingresadas en planes específicos o la asistencia en problemáticas puntuales, aunque se observó imposibilidad de contactarlas posteriormente. En los casos en los que se detectaron situaciones de violencia o posibles abusos se notificó a la Fiscalía para que ésta diera curso a los organismos especializados en niñez.

<sup>6</sup> "A fasón" es el término empleado para referirse al trabajo por cuenta ajena. Dentro de la jerga coloquial en el sector de las confecciones, "fasonero" puede aludir a empresas intermediarias o personas que encargan la producción en los talleres para un tercero (que puede ser una marca reconocida, o una empresa licitadora que produce insumos para el Estado, etc.).



## Pensándo-nos: taller de validación final

Luego de la escritura del preinforme en el que fueron vertidos los hallazgos del análisis de las entrevistas, de los casos compartidos y de la normativa pertinente, se llevó a cabo un taller de validación junto con los miembros del Programa. El mismo fue desarrollado presencialmente el día 26 de julio en la ciudad de La Plata y contó con la intervención de miembros de DyA, de la autora del informe, de una facilitadora y una dibujante que acompañaron el proceso de intercambio entre los y las profesionales del programa, muchos de los cuales no habían sido entrevistados para el informe. Las reflexiones elaboradas en el taller permitieron enriquecer los hallazgos del preinforme y, por esta razón, fueron incorporadas en la redacción final del escrito.

Imagen 1. Resultado del taller colectivo



Fuente: Dina Sampinato

### El Programa como equipo de trabajo

El equipo del Programa se divide en tres sectores: el sector administrativo, el equipo de rescate y el sector de estadística. Entre los profesionales entrevistados, las instancias de intercambio dentro del Programa y la interdisciplinariedad dentro de los equipos fueron valoradas positivamente, señalando que ambas enriquecieron la forma de conducir las intervenciones y registrarlas en informes. Además, se subrayó la receptividad de la coordinación y dirección a las opiniones, críticas y sugerencias de los miembros de los equipos. Por otro lado, se ha indicado la reciente incorporación de profesionales que aportan un abordaje con perspectiva de género, considerada beneficiosa para el crecimiento del Programa. El compromiso con los objetivos del Programa y la consolidación de un sentido de pertenencia del equipo son dos características que se destacaron tanto en las entrevistas como en el taller de

validación. Como contrapunto, se ha valorado negativamente la irregularidad y la intermitencia en el cumplimiento de tareas administrativas que implican el relevamiento de datos básicos de las personas damnificadas encontradas en los allanamientos realizados por los miembros del equipo de rescate. Asimismo, dentro del taller de validación ha emergido la demanda de fomentar la capacitación y formación dentro del Programa, como también la generación de instancias de reflexión “fuera de la automatización” del ejercicio de sus tareas.

El Programa interviene mayormente a partir de un requerimiento del Poder Judicial o del Programa Nacional de Rescate. La participación del Programa en los allanamientos ha cambiado de acuerdo con la dirección del Programa y el enfoque promovido. Se ha advertido la disminución de los casos en los que fueron convocados este año, destacando que más recientemente las Fiscalías han convocado al Programa Nacional. La vinculación con estas últimas ha sido descrita como variable, dependiendo de cada fiscalía en particular.

El Programa funciona por derivación, en articulación con otras instituciones y organismos. La caracterización de dichas articulaciones ha sido diversa según el organismo. Se ha señalado que, en ocasiones, la vinculación ha sido facilitada a través de canales interpersonales entre funcionarios de las diversas instituciones. Al respecto, las personas entrevistadas sostuvieron que las restricciones durante la pandemia fomentaron los encuentros entre los diversos organismos propiciando la sincronización de las reuniones. Entre las instituciones con las que sostienen una vinculación más fluida sobresale la SENAF, la Dirección Nacional de Migraciones y, más recientemente, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Algunos miembros del Programa destacaron el crecimiento de los vínculos interprovinciales. El trabajo orgánico entre las diversas instituciones ha sido una de las demandas expresadas en el taller de validación junto con la necesidad de establecer las competencias de cada una de ellas, para evitar que las respuestas brindadas en cada caso dependan de los vínculos interpersonales contruidos por los miembros del Programa.

En líneas generales, el accionar de los diversos organismos estatales ante los requerimientos de intervención fue caracterizada por los profesionales entrevistados como restringida (en muchos casos por escasez presupuestaria). En este sentido, se ha cuestionado la demora en la asignación de subsidios para asistir a las personas damnificadas. Se ha puntualizado que la articulación con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires cuenta con limitaciones. Por un lado, se ha considerado insuficiente su participación en la generación de oportunidades laborales para las damnificadas y los damnificados. Por el otro, se ha señalado que la participación de este organismo dentro de los allanamientos ha descuidado el anonimato de las víctimas.

**Uno de los objetivos centrales de la intervención del Programa consiste en evitar la revictimización de la persona damnificada por el delito de trata. En relación con ello, se ha advertido que una de las falencias más significativas ha sido el otorgamiento de un subsidio como única respuesta, y no así la implementación de un plan integral que posibilite el acceso a un empleo y vivienda dignos. Asimismo, se han caracterizado como insuficientes los subsidios otorgados por el Estado, lo que obliga a las personas damnificadas a retornar al circuito de explotación. Los miembros del equipo identifican no solo la necesidad de un ingreso entre las personas asistidas, sino además la búsqueda de empleo por la importancia conferida al trabajo en términos subjetivos e identitarios.<sup>7</sup> En este sentido, el subsidio no representaría una fuente monetaria “digna” para los propios damnificados. Sumado a ello, los profesionales del Programa indicaron la necesidad de reforzar actividades de prevención por parte del Estado.**

Los instrumentos normativos han sido señalados como adecuados. Paralelamente, los y las profesionales entrevistadas mencionaron que los protocolos han ido perfeccionándose gracias a la incorporación de lo aprendido a lo largo de sus intervenciones. No obstante, las situaciones que afronta el equipo del Programa exigen el despliegue de una relativa flexibilidad en las prácticas. Los protocolos son entendidos como ordenadores y fijadores de criterios y pautas. Empero, las situaciones y subjetividades de las personas damnificadas exceden las posibilidades de acción establecidas por estos protocolos.

7 Hay contradicciones en este punto. Algunos testimonios sostienen que ha sucedido el hecho de encontrar las mismas víctimas en diferentes operativos, otros niegan que ello haya sucedido.

Sobre los recursos materiales, los y las profesionales entrevistadas coincidieron en que se observa una mejora desde la implementación del fondo rotativo, empleado en situaciones de extrema necesidad.<sup>8</sup> Han sido recurrentes los relatos de intervenciones –previas a la asignación del fondo– en las que los mismos profesionales del Programa debieron afrontar económicamente las necesidades de las personas damnificadas (compra de alimentos, pañales, medicamentos, etc.). La utilización del fondo exige una tramitación, sin embargo, ésta no se traduce en una demora en la asignación del dinero en los casos de emergencia. Los y las profesionales coincidieron en señalar que cuentan con adecuados recursos humanos y que, en este punto, también han logrado crecer en cantidad de integrantes y organizarse para reducir el desgaste propio de la tarea (estableciendo teléfonos y horarios de guardia, identificación y reconocimiento de sus propios derechos laborales, etc.). Por otro lado, se ha puntualizado sobre otras necesidades específicas para el mejoramiento del Programa (adquisición de licencias de software para procesamiento de la información, por ejemplo).

Las entrevistas incluyeron preguntas sobre el enfoque predominante en el Programa y sus transformaciones. En este punto se encontraron marcadas divergencias entre los y las profesionales entrevistadas. Algunas manifestaron preocupación por ciertos rasgos asistencialistas en las prácticas del Programa y la consecuente dificultad para obtener efectos duraderos sobre los damnificados en la restitución de sus derechos. Asimismo, se identificó una relativa tendencia a priorizar las funciones del Programa en tanto auxiliar de la justicia. Contrariamente, otras respuestas afirman que el Programa sostiene una perspectiva crítica hacia el asistencialismo, proponiendo a cambio un abordaje más integral y procesual sobre la situación de la persona damnificada. En este sentido, objetan el empleo del término “víctima”, así como las perspectivas individualizantes o económicamente reduccionistas sobre el fenómeno de la trata y/o la explotación. En lineamiento con esto último, se ha valorado la implementación de una perspectiva que considera las trayectorias y proyecciones de vida de quienes son empleados en talleres de costura, para dejar de tratarlos como sujetos pasivos. Esto se ha traducido –para un sector de los y las profesionales entrevistadas– en acciones concretas como la solicitud a los operadores judiciales de que no sean confiscadas las máquinas ni los celulares en los allanamientos, y en procurar objetivos como el fortalecimiento educativo y la restitución de derechos (en detrimento del anterior enfoque centrado en el “rescate” y en oficiar de “auxiliar de la justicia”).

Un punto de especial relevancia es el tema de la continuidad de los casos. No se explicitaron criterios uniformes en torno a cuándo cerrar un caso (puede ser porque la persona damnificada desiste de la intervención, por pérdida de contacto, por causa archivada, etc.). Algunos testimonios afirmaron que los casos nunca se cierran, sino que pasan a ser considerados como casos “pasivos”, dejando abierta la posibilidad de que las personas damnificadas mantengan el contacto con el Programa (como ejemplo de esto último se cita el caso A/21 en el que se procuró el ingreso de las personas damnificadas al Plan Potenciar Trabajo incluso luego de que la causa fuera archivada por no comprobarse la existencia del delito de trata). Se ha advertido una menor cantidad de casos activos en la actualidad en comparación con la cantidad sobre la que trabajaban para el mismo periodo en años anteriores. Ello ha sido explicado parcialmente por el papel desplegado por el Programa Nacional. Contradictoriamente, se ha indicado que se observa una ampliación del alcance geográfico de las actuaciones del Programa pasando de distritos del primer cordón del conurbano bonaerense a lugares como Mar del Plata y Bahía Blanca, esto se debe, según las personas entrevistadas, a una paulatina difusión de la existencia del Programa.

Por último, uno de los puntos sobresalientes en las entrevistas efectuadas a los miembros del Programa y en el taller de validación giró en torno al escaso reconocimiento simbólico y material de las labores desarrolladas, de los riesgos, del desgaste y de las implicancias sobre la subjetividad de las personas que conforman el equipo. Esto último adquirió mayor resonancia entre los profesionales a raíz de la pandemia, coyuntura que visibilizó la importancia del trabajo desarrollado por el Programa, el compromiso de sus integrantes y las implicancias del sostenimiento de este trabajo en la vida cotidiana de cada una de estas personas. En el taller de validación emergieron, incluso, las contradicciones entre el sostenimiento de la maternidad y las tareas de cuidado de las profesionales, con las exigencias de las tareas de rescate y acompañamiento que pueden implicar jornadas de hasta doce horas. De igual modo, los ingresos percibidos han sido caracterizados como insuficientes, obligando a los miembros a asumir otras labores para poder alcanzar un salario que les permita subsistir.



8 El Fondo Rotativo de Abastecimiento fue creado en 2017 mediante el decreto 500/2017. El objetivo de su creación consiste en la disponibilidad inmediata de recursos monetarios ante posibles demandas de víctimas de trata y otros delitos que requieran ser atendidas con urgencia. Los recursos monetarios anuales con los que cuenta el Programa actualmente son 650 mil pesos.

## Particularidades de la asistencia en el sector de las confecciones

Según los miembros del Programa entrevistados, las razones que explican la existencia de los talleres de costura obedecen a la misma estructuración económica capitalista actual, que propicia la tercerización y la difusión de prácticas y representaciones de corte colonialista y patriarcal. Esto redundando en el hecho de que los principales acusados –y perseguidos judicialmente– por el delito de trata y explotación no acaban siendo los verdaderos responsables de la continuidad de estas prácticas delictivas. En este punto se ha señalado la escasa política de fiscalización por parte del Estado en situaciones que indiquen la posible existencia de explotación laboral. Esto ha sido señalado como uno de los factores que abonan la reproducción de relaciones sociales de trabajo como las observadas en los talleres.

Un problema que se ha señalado de manera recurrente ha sido la escasa solicitud de asistencia entre trabajadores y trabajadoras encontradas en los talleres. La asistencia ha sido requerida puntualmente para la tramitación de la Asignación Universal por Hijo o del DNI, luego de lo cual las personas damnificadas dejan de contestar los llamados del equipo o “se pierden”. Uno de los factores explicativos mencionados apunta a la subjetividad de los propios trabajadores de la costura. En este sentido, los profesionales del Programa entrevistados convergen en la idea de que las y los trabajadores encontrados en los allanamientos en talleres no se perciben como víctimas de trata, o bien, reconocen la explotación a la que se encuentran sujetos, pero esta se enmarca en un proyecto que implica soportar esos empleos transitoriamente hasta poder comprar máquinas propias. Se ha destacado el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras encontradas en talleres textiles son mayoritariamente migrantes de Bolivia que no suelen contar con estudios formales completos. Algunas entrevistas describieron a este grupo social como “cerrado” o “desconfiado”, lo cual ha demandado atender a las subjetividades de estas personas y sus representaciones sobre su “autosuficiencia”.

Otro factor explicativo de la escasa solicitud de asistencia guarda relación con el hecho de que los talleres garantizan no sólo un empleo, sino además un alojamiento para los trabajadores migrantes y sus familias. Así, los allanamientos en estos emplazamientos aparecen interponiéndose en los proyectos de las personas migrantes, clausurando sus fuentes de ingreso y vivienda. Algunos de los profesionales del Programa consultados sostuvieron incluso que la presencia y las entrevistas del Programa dentro del contexto de allanamiento acabaron resultando agresivas y suscitaron la desconfianza de aquellos a quienes se pretendía asistir. Uno de los avances identificados en esta dirección ha sido el hecho de lograr que no confisquen la maquinaria y evitar la clausura, así como la redacción de informes a la justicia que den cuenta de la responsabilidad de los fabricantes.

A diferencia de la explotación sexual, donde las víctimas son personas individuales, los y las damnificados/as dentro de los talleres integran grupos familiares, delineando así cierta especificidad sobre el abordaje de este tipo de casos. **En esta dirección se advierte que los dispositivos y estrategias de asistencia no están organizados para ofrecer un abordaje familiar, sino que se encuentran sectorizados (abordando separadamente a mujeres, niños, etc.).**





## Restitución de derechos de las personas damnificadas por el delito de trata de personas.

El presente acápite procura describir la intervención del Programa en el acceso de las personas damnificadas por el delito de trata y explotación a sus derechos. Tomando como punto de partida los derechos que el Estado nacional debe garantizar, en virtud de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008), se recorren los puntos sobresalientes del artículo 6° de dicha ley (modificado por Ley 26.842, Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2012)) bajo los cuales se sintetizan los hallazgos obtenidos del análisis de las fuentes arriba mencionadas.

Según el artículo 6° de la Ley 26.364 (modificado por Ley 26.842), el Estado debe garantizar a las víctimas de trata los siguientes derechos:

**a.**

Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan.

**b.**

Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social.

**c.**

Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal.

**d.**

Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.

**e.**

Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias.

**f.**

Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones previstas por la ley 25.764.

**g.**

Permanecer en el país, si así lo decide, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la ley 26.165.

**h.**

Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicite. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo.

**i.**

Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.

**j.**

Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso.

**k.**

Ser oída en todas las etapas del proceso.

**l.**

A la protección de su identidad e intimidad.

**m.**

A la incorporación o reinserción en el sistema educativo.

**n.**

En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.

A continuación, se presentan los hallazgos desglosados según los incisos del artículo 6° arriba detallados. Algunos incisos fueron agrupados en virtud de su correlación y a los fines de no redundar. Otros incisos fueron omitidos, con la aclaración pertinente, dado que no pudo relevarse información alusiva correspondiente:

## Recibir información



- a. “Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan”.
- e. “Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias”.
- j. “Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso”.

El Programa está integrado por abogados y abogadas que realizan presentaciones en las causas e intervienen para dar respuesta a las situaciones de emergencia. Si bien el Programa no representa jurídicamente a las personas damnificadas, las asesora y las guía en el proceso (ofreciendo explicaciones sobre sus etapas, averiguando el estado de la causa, sus consecuencias e implicancias y el procedimiento). También puede realizar interconsultas con otros abogados y asiste a los propios funcionarios en el procedimiento de asistencia.

En estos puntos se ha mencionado que los y las profesionales del Programa procuran informar a la justicia cuál es la situación de la persona damnificada desde una mirada global, interpretando y resignificando los hallazgos de las entrevistas a dicha persona.

## Tipos de asistencia

- b. “Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social”.

Las/os profesionales entrevistados señalaron que el Programa no brinda asistencia directa en salud, sino que gestiona las derivaciones a centros públicos próximos a la ubicación de la persona damnificada. Los miembros de los equipos de rescate tramitan los turnos para las personas damnificadas por el delito de trata a través de la redacción de notas en los casos particulares.



Entre los obstáculos que se interponen en el cumplimiento de este punto sobresale de las entrevistas la saturación de los sistemas de salud pública. A ello se suman las complejidades específicas de las situaciones de las personas damnificadas. Por ejemplo, las reiteradas inasistencias de las personas damnificadas a los turnos de consulta psicológica tramitados pueden ocasionar la restricción de futuros turnos en centros públicos.<sup>9</sup>

## Alojamiento, higiene y alimentación



- c. “Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal”.

Entre las preguntas efectuadas a los miembros del Programa se ha puntualizado específicamente sobre la disponibilidad de refugios. Este punto constituye uno de los más discutidos. Todos los testimonios dan cuenta de la actual inexistencia de refugios propios de la Provincia de Buenos Aires, pese a que la normativa indica que cada distrito judicial debe disponer de uno, y pese a los reiterados intentos o proyectos identificados por los miembros del Programa.

9 Se ha señalado que la solicitud de asistencia psicológica es más frecuente en los casos de trata con fines de explotación sexual. En este sentido, en el taller de validación emergió como demanda la necesidad de reforzar las estrategias de respuesta en torno a la salud mental y los consumos problemáticos de las personas damnificadas.

A pesar de que algunos y algunas profesionales entrevistadas señalaron que la implementación de refugios puede no ser la solución más adecuada, en la gran mayoría de las respuestas se identifica la necesidad de disponer de refugios o alojamientos propios. Se consideró que éstos facilitarían la disponibilidad de alojamiento en situaciones de emergencia, implicarían una importante reducción de costos (dado que algunas situaciones de emergencia se resuelven alojando a las personas en habitaciones de hoteles financiadas con el fondo rotativo) y permitirían afrontar dificultades en casos específicos como alojar a grupos de familiares con niños, o en situaciones en que el refugio de la SENAF se encuentra saturado. Más aún, la inestabilidad habitacional ha sido indicada como uno de los puntos que pueden conllevar a la revictimización de las personas damnificadas.

En la actualidad, las necesidades de alojamiento son respondidas mayormente a través de articulaciones con refugios administrados por la SENAF en tanto Punto Focal Nacional. Se ha mencionado además la articulación con la Red de Hogares del Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género de la Nación, con hogares administrados municipalmente (destinados a víctimas de violencia de género) o con Organizaciones No Gubernamentales (esto último con menor frecuencia). Los casos de emergencia han obligado al Programa a recurrir a redes familiares y conocidos de la persona damnificada para dar respuesta a la necesidad de hospedaje. Asimismo, la disponibilidad de recursos monetarios a través del fondo rotativo ha facilitado la gestión de un alquiler (habitaciones o viviendas), en hoteles o a través de inmobiliarias; y, con programas particulares en cada caso, la obtención de casillas o módulos.

No obstante, se ha sostenido que las personas damnificadas encontradas en los talleres de costura no suelen solicitar asistencia en torno a la vivienda. En estos casos se han identificado otros desafíos como el hecho de que el refugio de la SENAF no tiene una política adecuada para recibir a grupos familiares; el hecho de que éste tampoco contempla específica, ni exclusivamente, a personas damnificadas por delitos de trata; o la falta de una política global de vivienda para los y las damnificadas más allá –o después– del refugio.

La cobertura inmediata de otras necesidades como pasajes, alimentos, medicamentos, elementos de higiene, entre otras, también es garantizada mediante el fondo rotativo. Para su ejecución, los miembros de los equipos técnicos del Programa cuentan con tarjetas de débito que les permiten adquirir los insumos en situación de emergencia. Los fondos utilizados deben ser luego justificados a través de la rendición periódica de facturas y comprobantes. Cabe destacar que dicha tramitación no retrasa la disponibilidad del dinero para responder ante emergencias.

## Empleo

### d. “Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”.

Junto con el alojamiento/vivienda, el empleo es uno de los ítems más problemáticos identificados por las/os profesionales entrevistados. La asistencia en esta temática ha sido recurrentemente caracterizada como provisoria o paliativa. El Programa gestiona el ingreso a programas de asistencia económica de alcance general o abierto (esto es, no destinado específicamente a víctimas de trata), como por ejemplo el Plan Potenciar Trabajo.<sup>10</sup> Sobresale la mención de que el accionar del Programa –a través del Ministerio de Trabajo– no ha resultado en la inserción laboral directa o la gestión de empleos, más bien, se ha traducido en una política de capacitaciones con poca capacidad de resolver el acceso a oportunidades de empleo digno a largo plazo. Asimismo, ante las propuestas de inserción laboral, los miembros del Programa manifestaron que los cupos no alcanzaron a cubrir el 5 % de los casos a resolver. Algunos profesionales entrevistados han señalado que la insuficiencia de las respuestas en torno a la necesidad de empleo puede desembocar en la revictimización de la persona damnificada o su permanencia en trabajos no registrados o precarios.

Uno de los casos presentados por los miembros del equipo para la confección del presente informe (caso C/21) da cuenta de las dificultades en el acceso a planes tendientes a fortalecer la formación y capacitación laboral. En dicho caso dos trabajadores de un taller de confección se encontraban tramitando la inscripción, o bien cursando carreras de nivel terciario en la Universidad Nacional de La Matanza y la Cruz Roja. El Programa intentó obtener becas Progresar y una beca particular ofrecida por la Cruz Roja para garantizar la continuidad de los estudios. Las personas damnificadas



10 El Plan Potenciar Trabajo refiere al Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, cuyo objetivo es “mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas” promoviendo el desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa. Como contraprestación del programa, las y los titulares pueden participar en proyectos socioproductivos, comunitarios o laborales y/o terminar sus estudios o formación laboral.

fueron rechazadas en la asignación de la Beca Progresar mientras que la Cruz Roja apenas reconoció una fracción de la cuota como parte de la beca, a la vez que informó cuotas adeudadas por una de las víctimas. En respuesta a ello se procuró el ingreso al Plan Potenciar Trabajo.

El equipo interviene en la articulación entre la persona damnificada y los organismos del Estado, pero no es responsable directo del otorgamiento y gestión de los estipendios. A través de informes habitacionales confeccionados por las trabajadoras sociales del Programa, se realiza una presentación acompañando a las personas damnificadas. Luego, el ingreso a los planes específicos se ejecuta en los plazos habituales (90 días aproximadamente). Si bien el equipo hace un seguimiento de las personas damnificadas asistidas, una vez ingresadas a los programas específicos éstas son monitoreadas por los organismos que los administran.

La participación del sector privado no fue mencionada, a excepción de un proyecto de incorporación de víctimas de trata con fines de explotación sexual al mercado laboral. Esto último contaría con el acompañamiento del Estado en capacitaciones a las personas asistidas para que luego sean contratadas en empresas que firmaron convenios con el Ministerio de Trabajo.<sup>11</sup> Cabe destacar que tampoco se mencionó la articulación o cooperación de los sindicatos en los procedimientos de asistencia.

## Protección

### f. “Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia”.



Si bien no se hizo mención de este punto en las entrevistas a los miembros del Programa, uno de los casos presentados para la confección del presente informe (caso B/21) dio cuenta de una situación de peligro experimentada por un conjunto de trabajadores. Éstos cosían en una fábrica abandonada, donde además convivían con otras personas ajenas al funcionamiento del taller de costura. Una de estas personas presuntamente contaba con antecedentes penales por abuso y los trabajadores temían por la seguridad de sus niños. En otro caso (caso B/20) se registraron abusos y tratos violentos por parte de un tallerista a su cónyuge. En ambos casos, el Programa solicitó a la Fiscalía que se diera intervención a los organismos dedicados a niñez, no

registrándose un seguimiento posterior.

## Permanencia en el país o retorno

### g. “Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin”.

### h. “Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo”.



Las respuestas de los miembros del equipo subrayan la existencia de un prejuicio sobre la voluntad de retorno entre víctimas que fueron engañadas en el reclutamiento laboral, suponiendo de antemano que las personas desean volver a sus países de origen. No obstante, en la mayor parte de los casos se ha encontrado que, a pesar del engaño, los y las trabajadoras migrantes desean permanecer en el destino migratorio. El Programa intercede en la facilitación de la tramitación del DNI y otros tipos de documentación, como certificados que acrediten discapacidad, la jubilación o incluso la Asignación Universal por Hijo. En comparación con los plazos que pueden experimentar las personas que acceden individualmente a los organismos que expiden la documentación solicitada, los profesionales entrevistados señalan que la intervención del Programa agiliza el proceso que implica la tramitación.

Uno de los casos presentados por el Programa (caso A/21) involucraba trabajadores oriundos de Paraguay que solicitaron pasajes para retornar a su país. La causa fue archivada, rechazando la existencia del delito de trata de personas, no obstante, el Programa intentó obtener el ingreso al Plan Potenciar Trabajo que no pudo ser tramitado puesto que las personas no atendieron los llamados telefónicos del equipo.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> En relación con los sindicatos fue mencionado convenio con UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), aunque centrado en la participación de éste en las fiscalizaciones.

<sup>12</sup> No se relevó información pertinente sobre los puntos i) y l) en las entrevistas.





### k. “Ser oída en todas las etapas del proceso”.

Al respecto de este punto se ha enfatizado en el respeto a las personas damnificadas, la apertura interpretativa, la escucha atenta hacia las historias de vida, las necesidades, deseos o proyectos manifestados por éstas. En esta dirección se ha mencionado el abandono de la categoría “víctima” (así como de la visión pasiva y asistencialista sobre ésta) y su reemplazo por una perspectiva que reconozca la agencia de la persona damnificada.

## Educación

### m. “A la incorporación o reinserción en el sistema educativo”.

De las entrevistas a profesionales del Programa surgió un énfasis en la tramitación de planes que propiciaran la finalización de los estudios y la formación laboral. Así, se ha procurado el ingreso de las personas damnificadas a programas como el Potenciar Trabajo, como se observa en los casos compartidos por el equipo. Aquí cabe recordar, nuevamente, el caso C/21, que involucraba a dos jóvenes que intentaban acceder a estudios terciarios (UNLAM y Cruz Roja). La Cruz Roja accedió a una beca parcial para la persona asistida e informó sobre cuotas adeudadas. Asimismo, se intentó acceder a la Beca Progresar para dar continuidad a los estudios de enfermería, pero la institución rechazó la solicitud. En respuesta a ello se inició la tramitación de un Plan Potenciar Trabajo.



## Abordaje con niños y adolescentes.

**n. “En caso de tratarse de una víctima menor de edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveere para su protección y desarrollo”.**



En este punto se ha identificado un proceso de mutación dentro del Programa orientado a propiciar una participación más activa con niñeces y adolescencias. Al respecto se ha puntualizado en la actual confección de un protocolo, dejando lugar simultáneamente a la flexibilidad que exige el abordaje de estos casos.

Una mención recurrente entre los y las profesionales entrevistadas refiere al escaso acompañamiento del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), incluso en aquellos procedimientos en los que el Programa sugirió a los fiscales la convocatoria específica a esta institución. Las respuestas brindadas dan cuenta de la necesidad de una articulación orgánica con dicho organismo para garantizar la asistencia integral y restitución de derechos. En el taller de validación se efectuó una distinción entre el accionar del Organismo Provincial y los Servicios Locales (como ser el de Niñez y Adolescencia o aquel de Mujeres, Género y Diversidad), siendo estos últimos con los que se requiere forjar una mejor articulación.

Las intervenciones evocadas en este punto aludieron a la compra de insumos como útiles, pañales o la tramitación de ingresos a las escuelas o jardines. En los casos B/20 y B/21 se detectó la exposición de niños ante posibles situaciones de violencia o abuso dentro de los talleres. En ambos, el Programa solicitó a la Fiscalía que diera curso a la intervención de los organismos competentes. También se registraron casos en los que había niños con problemas de salud y, por ejemplo, en uno de estos la madre permanecía trabajando y residiendo en el taller ya que sus empleadores le permitían llevar a su hijo al médico. En dicho caso la mujer damnificada no solicitó la asistencia del Programa, aunque se intentó sostener la comunicación telefónica e inscribir a la trabajadora a un Plan Potenciar Trabajo.

## Producción de información sobre trata de personas

En las entrevistas a profesionales del Programa se abordó, además, el tema de la producción de información relativa a la trata de personas. Los profesionales entrevistados identifican una mejora en los procedimientos de sistematización de la información recolectada, especialmente a partir de las restricciones al trabajo presencial impuestas por la pandemia que fomentó el uso de herramientas digitales de uso compartido, en detrimento del registro físico en papel. También se han creado planillas para que los equipos territoriales puedan completar con sus intervenciones y que luego puedan ser volcadas en informes periódicos. En el último periodo también se registra una consolidación del Observatorio de Acceso a la Justicia del gobierno bonaerense que produce y publica información periódicamente.

No obstante, algunos miembros del Programa plantearon la importancia de mejorar el registro de las intervenciones de los equipos, a menudo dificultado por las propias exigencias del trabajo en territorio. La irregularidad en el registro introduce posteriores inconvenientes, puesto que el armado incompleto de las carpetas que conforman cada caso obstaculiza la elaboración de informes que plasmen el trabajo llevado a cabo por el Programa y la subsecuente asignación presupuestaria. En vinculación con esto último, cabe mencionar la falta de un software que agilice el procesamiento de la información recolectada, aunque se ha mencionado la actual búsqueda de soluciones en esta materia.

Algunas y algunos profesionales del Programa entrevistados refirieron a recientes modificaciones en las formas de registrar y escribir los informes, incorporando una mirada global que enmarque el conocimiento que guardan las personas damnificadas sobre su propia explotación y cuya continuidad se entienda en el marco de proyectos económicos y de vida. En varias entrevistas se advierte el desconocimiento sobre la posterior utilización y circulación de la información construida y la necesidad de obtener una devolución por parte de las instancias estatales que solicitan los informes (Poder Ejecutivo y Judicial).

Por último, fueron evocadas actividades de capacitación y visibilización de la problemática en barrios, escuelas, guardias de hospitales, organismos públicos, distintas ONG y entre funcionarios municipales. Dichas actividades incluyeron muestras fotográficas, murales y obras de teatro.

### Esquema 2. Avances y desafíos identificados

	Avances	Desafíos
<b>Recursos materiales</b>	Asignación del Fondo Rotativo (Decreto 500/17).	Disponer de refugios propios y mayores recursos.
<b>Equipo de trabajo</b>	La interdisciplinariedad amplió la perspectiva y enfoque. Reconocimiento de los derechos de los trabajadores del Programa. Compromiso de los trabajadores con el objetivo del Programa. Receptividad de la dirección en torno a sugerencias y reclamos del equipo. Representación en el Consejo Federal de Trata y en foros internacionales.	Agilizar y sistematizar el cumplimiento de tareas administrativas por parte de equipos técnicos. Equiparar la disparidad entre los convenios colectivos de los trabajadores del Programa. Promover la formación y capacitación interna del equipo. Visibilización y reconocimiento material y simbólico del equipo, de sus tareas y los riesgos que éstas implican.
<b>Asistencia del Programa</b>	Evitar el secuestro de maquinaria. Elaboración de informes que dan cuenta de la complejidad de la problemática. Reconocimiento y difusión de su actividad frente a otras instituciones.	Consolidar políticas integrales de empleo y vivienda de largo plazo. Fortalecer las tareas de prevención.
<b>Articulación con otros organismos</b>	Articulación aceptada con la SENAF y más recientemente con la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.	Consolidar la articulación con el Organismo Provincial de Niñez y con el Ministerio de Trabajo. Articular con el sector privado y con actores sindicales, con miras a efectivizar una política de empleo para las personas damnificadas por el delito de trata con fines de explotación laboral. Institucionalizar las articulaciones. Dar mayor difusión a las líneas de comunicación. Políticas y programas destinados específicamente a víctimas de trata.
<b>Estadística y sistematización</b>	Consolidación del Observatorio de Acceso a la Justicia y del funcionamiento de las tareas de estadística.	Implementación de un software para sistematizar intervenciones. Regularizar el registro de las intervenciones.

Fuente: Elaboración Propia en el marco de la consultoría

<sup>13</sup> El cuadro fue ampliado tras los hallazgos que emergieron en el taller de validación el día 26 de julio con los miembros del Programa.

## Anexo normativo

La asistencia a las personas damnificadas por el delito de trata se encuentra respaldada por un cuerpo normativo conformado por convenciones de organismos supranacionales ratificados por nuestro país, normativa nacional y provincial y protocolos de actuación. Este segmento ofrece un recorrido descriptivo sintético de los instrumentos normativos principales para enmarcar la caracterización del funcionamiento del programa.

### Trata de personas, explotación e industria de la confección

#### Normativa internacional

**Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, complementada por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (en adelante “Protocolo de Palermo”) (OIT, 2000):** es el instrumento normativo más importante en la problemática. Establece la definición de trata de personas, entendida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (art.3). A partir de ello, se exhorta a los estados a tipificar el delito de trata, prevenirlo, asistir, reparar y proteger a sus víctimas (aprobada en Argentina por Ley 25.632/2002).

#### Otros instrumentos de relevancia en torno a la trata y sus delitos conexos

**Convención sobre la Esclavitud (Sociedad de las Naciones, 1926):** define la esclavitud como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”. Prohíbe la trata de esclavos, que comprende “todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle” (art.1).

**Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (ONU, 1956):** se basa en los instrumentos de la OIT alusivos al trabajo forzoso y tiene como objetivo ampliar y reforzar el Convenio sobre la Esclavitud de 1926. De esta forma, exige la adopción de medidas tendientes a abolir las prácticas ligadas al trabajo forzoso como:

- **La servidumbre por deudas:** “el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios” (art. 1).
- **La servidumbre de la gleba:** “la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición” (art. 1).
- **La entrega, remunerada o no, de niños y jóvenes para ser explotados** (aprobada por Ley 7.672/1962)

**Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (ONU, 1990):** prohíbe el sometimiento a la esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos de migrantes y sus familiares (aprobada por Ley 26.202/2006).

**Convenio sobre el trabajo a domicilio C177 (OIT, 1996):** establece el respeto por los derechos e igualdad de trato para los trabajadores a domicilio.

**Convenio sobre el trabajo forzoso C29 (OIT, 1930):** Define al trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente” (art. 2). El carácter involuntario y la pena conforman los elementos centrales de esta definición. La pena es entendida en un sentido amplio, incluyendo la pérdida de derechos y privilegios, formas de coacción jurídica, económica o psíquica. El trabajo forzoso involucra aquellas sujeciones basadas en el engaño, violencia o retención de salarios o documentos.

**Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso C105 (OIT, 1957):** Complementa la definición contenida en el Convenio 29, regulando sus excepciones.

**El Protocolo relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 - P029 (OIT, 2014):** insta a los Estados a adoptar medidas de prevención, protección, acceso a la justicia y asistencia a las víctimas. La Recomendación sobre el trabajo forzoso R203 que acompaña el protocolo, sugiere la implementación de políticas orientadas a suprimir el trabajo forzoso y a profundizar estrategias de prevención y de protección contra abusos y prácticas fraudulentas, entre otras medidas que aluden al acceso a la justicia y la indemnización. Entre dichas recomendaciones se incluyen: iniciativas amplias de promoción de la libertad sindical, de la negociación colectiva, de las oportunidades educativas, así como de combate contra la discriminación, contra el trabajo infantil, etc.

**Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV CJI, 2008):** establece el concepto de personas en situación de vulnerabilidad, comprendiendo como sus causas: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas, culturales o religiosas, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, la orientación sexual e identidad de género, la privación de libertad. La importancia de esta definición radica en que la Ley 26.842, que define y penaliza la trata de personas, establece el aprovechamiento de la vulnerabilidad como agravante del delito.

## **Normativa Nacional**

**Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008):** establece una definición de la trata de personas en línea con el Protocolo de Palermo, se fijan las sanciones a quienes incurrieran en el delito y se pauta la asistencia y reparación de las víctimas. La ley parte de la diferencia entre las víctimas menores y mayores de edad. Para las primeras reconoce la presencia del delito aun sin medios comisivos (como el engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios) para obtener su consentimiento. En cambio, en el caso de las personas mayores de edad, la definición de trata implica la presencia de dichos medios comisivos. Esta distinción motorizó reclamos por parte de organizaciones de la sociedad civil (especialmente luego del fallo absolutorio de los acusados por la desaparición de Marita Verón). El desacuerdo de estas últimas se fundaba en la idea de que aquella diferenciación implicaba la obligación de demostrar la ausencia de consentimiento de las personas mayores de edad.

**Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2012):** como respuesta a las críticas recibidas por la ley anterior, la definición de trata propuesta por esta redacción elimina las distinciones entre mayores y menores de edad con relación al consentimiento y la evaluación de los medios comisivos. Así, la trata de personas queda definida como: “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”, entendiendo por explotación los siguientes supuestos:

- a. Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad.**
- b. Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados.**
- c. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos.**
- d. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido.**
- e. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho.**
- f. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.**

Sobre el consentimiento el texto de la norma añade: “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores” (art.1). Como resultado de las modificaciones introducidas por esta ley, fueron reformados algunos artículos del Código Penal, incorporando nuevas figuras como la esclavitud, trabajos forzados y matrimonio servil (artículo 24 de la Ley 26.842 que modifica el art. 140 del CP), elevando las penas mínimas en los delitos de trata e incluyendo a los medios comisivos especificados por la ley anterior como agravantes.

Con la sanción de normativa específica sobre trata de personas fue ampliada la red institucional y de dispositivos para la detección, prevención y eliminación del delito y de asistencia a sus víctimas. La Ley 26.842 dio origen al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que articulan las acciones de prevención, sanción y asistencia a las víctimas con representantes de diversos ministerios y actores de la sociedad civil. Esto último conllevó a la creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (resolución 731/2012), juntamente con la línea telefónica nacional y de atención permanente 145, que recibe denuncias anónimas y gratuitas. Cabe destacar que en el año 2013 la Resolución PGN núm. 805 dictó la creación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en reemplazo de la anterior Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). El objetivo de la PROTEX consiste en asistir a las fiscalías de todo el país en las causas de trata de personas y a la Procuradora General de la Nación en el diseño de la política criminal del Ministerio Público.

La ley de trata sancionada en 2012 (artículos 4º y 5º de la Ley 26.842) reemplaza, a su vez, los artículos de la ley anterior vinculados a los derechos de las víctimas. Así, quedan establecidos los derechos (mencionados anteriormente en este mismo documento), independientemente de la condición de querellante o denunciante en el proceso.

**La Resolución 731 del año 2012 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** dictó la creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito Trata bajo la órbita la Subsecretaría de Política Criminal. Posteriormente, bajo la Resolución 445 de 2015, el Programa Nacional pasó a depender de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. En 2015 también fue sancionado el Decreto 111, estableciendo los lineamientos de acción básicos para la ejecución de las medidas en torno a garantizar los derechos de las víctimas (enumerados en el artículo 6º previamente citado) y convocando a la primera reunión del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

**Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (2017):** especifica los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Incluye en su artículo 8º (inc. f) a las víctimas de delitos de trata de personas entre aquellas que se presumen en peligro y que, por lo tanto, gozan del derecho a requerir medidas de protección para la seguridad propia, de sus familiares y testigos.

**Ley 27.508 de Creación del Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (2019):** constituye el Fideicomiso de Administración destinado a asistir a las víctimas del delito de trata y explotación, y especifica los usos de los bienes decomisados, introduciendo nuevas modificaciones a la Ley 26.364. El Fondo fue creado el mismo año a través del Decreto 844/2019.



## Otras leyes de alcance nacional relacionadas a la trata y sus delitos conexos

**Constitución Nacional Argentina, artículo 15:** prohíbe la esclavitud en toda la extensión de la Nación.

**Ley 12.713 de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena (1941):** regula el trabajo a domicilio por cuenta ajena. Confiere facultades de inspección a los sectores trabajadores para velar por el cumplimiento de la normativa laboral y especifica las responsabilidades solidarias de la cadena de subcontratación por las condiciones de trabajo en los domicilios de los trabajadores. Esta ley suprime, además, la deducción salarial o multas a los trabajadores por fallas en la confección.

**Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (1976):** establece el carácter voluntario del contrato laboral en su artículo 22. Paralelamente, el artículo 131 prohíbe la deducción, retención, o compensación por parte del empleador de sumas que rebajen el monto de las remuneraciones (en concepto de entrega de mercaderías, alimentos, vivienda, alojamiento, uso de herramientas), así como también prohíbe la imposición de multas al trabajador.

**Ley 25.871 de Política Migratoria (2003):** internaliza los fundamentos del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Parte del Mercosur. Esta ley anula el decreto/ley anterior (22.439/1981) sancionado durante el periodo dictatorial, fijando los principios tendientes a garantizar la igualdad de trato entre argentinos y extranjeros sobre la base del reconocimiento del derecho esencial e inalienable a migrar (art. 4). La ley reconoce el criterio de nacionalidad para los ciudadanos de los países miembros y asociados al Mercosur para obtener una residencia que posibilite el acceso al empleo formal. Por otro lado, la ley sanciona con penas de 1 a 6 años a quien realice, promueva o facilite el tráfico y la permanencia ilegal de personas extranjeras en el país con el fin de obtener un beneficio (arts. 116 y 117).

### Normativa provincial

**Ley 14.453 Sobre prevención, lucha y erradicación del delito de Trata de Personas y de los delitos conexos (2012):** adopta medidas de prevención, lucha y erradicación del delito de trata de personas y delitos conexos y la asistencia de sus víctimas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

La ley dicta la creación de la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia a las Víctimas, conformada por representantes de diferentes ministerios y organismos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. De acuerdo a los artículos 8° y 9°, la Oficina constituye la autoridad de aplicación del Programa Provincial contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Dicha Oficina será, asimismo, la responsable de crear el Observatorio de Trata de Personas cuya función consiste en el monitoreo, registro y sistematización de los datos y estadísticas (art. 10). Por otra parte, la Oficina tiene como funciones: proteger y asistir a las víctimas de trata en términos físicos, psicológicos, espirituales, sociales, económicos y jurídicos; realizar el seguimiento judicial de los casos y ofrecer asesoramiento y patrocinio jurídico; proporcionar condiciones dignas de vivienda, alimentación, sanidad y todo lo necesario para el sustento personal, contemplar las necesidades especiales de las víctimas menores de edad; brindar capacitación y ayuda en la búsqueda de empleo; capacitar a los funcionarios de migración, entre otras (art. 12). Entre sus atribuciones se cuentan: la coordinación del intercambio y publicación de datos sobre trata de personas; la promoción y petición ante los poderes nacionales de cooperación entre Estados, adopción de medidas y normas; diseño de su plan de acción; elaboración de su presupuesto, entre otras (art. 13). También tiene la facultad de promover la capacitación de estructuras municipales (art. 18). La ley determina, además las modalidades de financiamiento de la Oficina (art. 17) y la apertura de un registro de organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema (art. 16).

Por otro lado, la ley crea el Programa Provincial para la lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Las funciones del Programa consisten en la promoción de la coordinación intersectorial; la propuesta de protocolos de trabajo interinstitucional; el desarrollo de actividades de capacitación; participación en el diseño de políticas y medidas para asegurar la protección y asistencia; contribución en la implementación de un sistema de refugios; prevención de la revictimización de las personas asistidas; promoción de campañas en los medios de comunicación, entre otras.

La normativa también establece las funciones del Observatorio que incluyen la investigación, el registro, análisis y publicación de información sobre el estado de situación de la problemática; confección de informes; contribución al diseño de políticas públicas, herramientas de seguimiento, actividades de difusión y acciones tendientes al respeto de los derechos de las víctimas. A estas funciones se añaden: la asistencia para la búsqueda y obtención de oportunidades laborales para las víctimas de trata; implementación de líneas telefónicas para recepción de denuncias; acciones tendientes a aumentar la capacidad de detección y persecución de redes de trata, entre otras.

Finalmente, cabe destacar las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.922) al incluir a las víctimas del delito de trata de personas dentro de las especificaciones sobre derechos y facultades de las víctimas (art. 83, inc. 10). Los derechos garantizados a las víctimas por la normativa incluyen el trato digno y respetuoso; documentación clara y exhaustiva de las lesiones que se afirman sufridas; información sobre el procedimiento en curso; la salvaguarda de su intimidad, a recibir las mínimas molestias por el procedimiento; protección de la seguridad propia, la de sus familiares y testigos en casos que involucren a la delincuencia organizada; a requerir el reintegro inmediato de los efectos sustraídos; a procurar la revisión de la desestimación de la denuncia o su archivo.

Ley 14.473 (2013): da lugar a la creación del Sistema de Refugios para Víctimas de Trata de Personas con fines de Explotación. Esta ley establece que cada departamento judicial de la provincia deberá contar con –por lo menos– un refugio compuesto por un equipo interdisciplinario que provea asesoramiento para la recuperación psíquica y física y la asistencia médica por medio de derivaciones (art.12). A su vez, dicho equipo debe procurar la reinserción social y asistencia legal de la persona damnificada (art.7). Estos refugios deben proporcionar contención afectiva y debe funcionar las 24 horas (art. 7 y 8). Al mismo tiempo, la ley establece que los refugios deben estar subdivididos siguiendo los diversos tipos de trata (fines de explotación laboral, finalidad de explotación sexual, tráfico de órganos), género y edad (art. 9). Por último, se establece que las autoridades deberán confeccionar estadísticas e informes trimestrales para evaluar el funcionamiento de la institución (art. 17).

**Ley 14.739 (2015):** Dicta exenciones impositivas para aquellas personas que empleen a víctimas de trata o de sus delitos conexos.

## **Protocolos de asistencia y directrices**

**Protocolo para la Asistencia a las Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil (2008):** fue aprobado por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establece principios básicos de la asistencia a víctimas de trata y explotación sexual infantil. En este sentido, determina los puntos centrales que componen la asistencia integral basada en un enfoque de derechos y apelando al acuerdo interinstitucional. La asistencia comprende:

- Alojamiento entendido en un sentido amplio incluyendo: provisión de alimentos, vestimenta, elementos de higiene, ropa de cama, lugar de descanso (que debe estar disponible de forma permanente con personal técnico y profesional para la asistencia).
- Asistencia médica.
- Asistencia psicológica.
- Asistencia social, también entendida en sentido amplio, comprendiendo: el restablecimiento de lazos familiares, sociales o comunitarios; la asistencia económica a la víctima o a su familia; la elaboración de informes a los fines de coordinar con otros organismos.
- Espacios de recreación.
- Asesoramiento jurídico.
- Provisión de documentación.
- Condiciones de seguridad.
- Retorno voluntario asistido.



El Protocolo también determina los elementos que forman parte de la reconstrucción del proyecto de vida y pleno ejercicio de los derechos de la persona como segunda etapa de asistencia. La misma apunta al trabajo sobre el entorno social y familiar, dirigido a impulsar el proyecto autónomo de la víctima. Dependiendo del tipo de trata, “externa” o “interna”, se procurarán los organismos pertinentes para establecer la articulación (organismos del país de origen o cercanos al lugar de residencia de la víctima respectivamente).

**Protocolo Único de Articulación (2015):** elaborado por el Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, aprobado por Resolución 1280 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En el mismo se establecen las pautas de actuación en torno a:

- **Detección y denuncias (línea 145, correo electrónico y otras líneas telefónicas del Programa Nacional de Rescate y otros organismos; Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual; Fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores; Flagrancia; Demanda espontánea; AFIP).**
- **Judicialización, persecución del delito.**
- **Rescate y asistencia a las personas damnificadas (asistencia inmediata proporcionada por el Programa Nacional de Rescate hasta la declaración testimonial y derivación; Asistencia Integral a las Personas Damnificadas).**

En referencia a la Asistencia Integral, el Protocolo Único establece a la SENAF como nexo entre la Red Territorial del Ministerio de Desarrollo Social y los Puntos Focales Provinciales. La atención de la persona damnificada se rige por el Protocolo Nacional de Asistencia y se inicia exclusivamente a partir del consentimiento expreso de aquella. En caso de tratarse de un ciudadano nacional que desee regresar a su lugar de origen, será la jurisdicción donde se llevó a cabo la explotación la que se responsabilizará del traslado, tomando contacto con los Puntos Focales del lugar de origen, remitiendo un informe de la situación y las acciones realizadas.

En el caso de ciudadanos extranjeros que deseen retornar, éstos serán trasladados hasta la Ciudad de Buenos Aires, sede del Punto Focal Nacional, por el Punto Focal donde se produjo la explotación. Será la SENAF –en calidad de Punto Focal Nacional– la que articulará el retorno voluntario y asistido en articulación con las autoridades competentes del país de origen de la persona damnificada.

El Protocolo Único también establece la extensión de un Seguro de Capacitación y Empleo que consiste en un programa cerrado que funciona por derivación a la Secretaría de Empleo. En los casos en que las derivaciones provengan de instituciones ajenas al Ministerio de Trabajo se firman convenios como los que rigen con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o con la Fundación María de los Ángeles por la Lucha Contra la Trata de Personas. Las prestaciones ofrecidas a las víctimas de trata son aquellas disponibles para todas las personas pertenecientes al Seguro de Capacitación y Empleo, programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo o PROGRESAR, a saber: Terminalidad Educativa, Formación Profesional o Inserción laboral.

## **Protocolos de alcance provincial**

**Directrices para la Articulación de la Asistencia a Víctimas de Trata de Personas (2013), aprobada por Resolución Ministerial 19/13 del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires:** La creación del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata fue dictada por Resolución Ministerial (19/13) del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La resolución establece como funciones del Programa la centralización de toda actividad referida al acompañamiento y asistencia a las personas damnificadas por el delito de trata. El Programa deberá estar conformado por equipos interdisciplinarios y contará con un Protocolo de actuación.

**Protocolo de actuación del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata aprobado por Res. 19/13:** El protocolo parte de un abordaje de asistencia y acompañamiento, abarcando aspectos jurídicos y psicosociales, propiciando la contención y garantía de los derechos de las personas a fin de evitar su revictimización. Entre los objetivos del protocolo se cuentan:

- **Protección y asistencia a las víctimas.**
- **Implementación de políticas y acciones orientadas a la revinculación social.**
- **Acceso a la justicia.**
- **Visibilización y sensibilización en torno a la problemática.**
- **Todas las acciones implementadas deberán velar por el respeto de los derechos de las víctimas, a saber:**
- **Recibir información sobre sus derechos para garantizar el pleno acceso y ejercicio de éstos.**
- **Recibir asistencia psicológica y médica.**
- **Recibir alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene suficientes y apropiados.**
- **Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.**
- **Recibir asesoramiento legal integral.**
- **Recibir protección eficaz con la posibilidad de ser incorporados en el Programa Nacional de Protección de Testigos.**
- **Permanecer en el lugar o retornar al lugar de origen de acuerdo con su decisión.**
- **Prestar testimonio en condiciones de cuidado, protección de su identidad e intimidad.**
- **Ser informada sobre el estado de las actuaciones.**
- **Ser oída en todas las etapas del proceso.**
- **Incorporación o reinserción en el sistema educativo.**
- **Reconocer las necesidades especiales en caso de víctimas menores de edad.**

El Protocolo establece, además, el procedimiento de actuación en torno a la recepción de demandas, los allanamientos, la presencia de menores de edad, las entrevistas, el análisis integral, la derivación y el acompañamiento continuo.

